

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO P/IFT/270416/209

DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU XI SESIÓN ORDINARIA DEL 2016, CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2016.

LEYENDA DE LA CLASIFICACIÓN

Fecha de Clasificación: 27 de abril de 2016. **Unidad Administrativa:** Secretaría Técnica del Pleno, por contener información **Confidencial**, de acuerdo con los artículos 106, 107 y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ("LGTAIP"), conforme a la versión pública elaborada por la Dirección General de Sanciones y remitida por correo electrónico el 3 de junio de 2016.

Núm. de Resolución	Descripción del asunto	Fundamento legal	Motivación	Secciones Confidenciales
P/IFT/270416/209	Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones impone sanción y declara la pérdida de bienes en beneficio de la nación, derivado del procedimiento administrativo iniciado en contra de XXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de propietario del inmueble donde se detectaron las instalaciones y equipos de radiodifusión operando la frecuencia 100.7 MHz, en el Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, sin contar con la respectiva concesión, permiso o autorización.	Confidencial con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.	Páginas 1-3, 5, 6, 9-12, 14, 15, 21-26, 29-31, 33, 36, 37, 39, 40, 48-52 y 58-62.

EN SU CARÁCTER DE PROPIETARIO DEL INMUEBLE
DONDE SE DETECTARON LAS INSTALACIONES DE LA
ESTACIÓN DE RADIODIFUSIÓN QUE OPERA LA
FRECUENCIA 100.7 MHZ

Domicilio Conocido, Localidad de La Libertad,
Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco.

Ciudad de México, a veintisiete de abril de dos mil dieciséis.- Visto para resolver el expediente E-IFTUC.DG-SAN.V.0289/2015, formado con motivo del procedimiento administrativo de imposición de sanciones y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, iniciado mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciséis y notificado el veinte de enero del mismo año por conducto de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "IFT" o "Instituto"), en contra de [REDACTED], presunto propietario del inmueble donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión que operaba la frecuencia 100.7 MHz ubicada en domicilio conocido, Localidad de la Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, cuyas coordenadas en términos del Informe de Radiomonitorio número IFT/099/2015, [REDACTED], por la presunta infracción al artículo 66 en relación con el 75, y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la "LFTyR"). Al respecto, se emite la presente Resolución de conformidad con lo siguiente, y

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/1295/2015 de dieciséis de marzo de dos mil quince, la Dirección General de Verificación ("DGV") solicitó a la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico ("DGAVER"), realizar trabajos de radiomonitorio y vigilancia del espectro radioeléctrico a diversas frecuencias de radiodifusión sonora en Frecuencia Modulada (FM), en los

Estados de Veracruz, Oaxaca y Tabasco, con la finalidad de obtener una pronta ubicación de las estaciones que operan sin concesión o permiso, y ejecutar los operativos para garantizar la suspensión de dichas transmisiones

SEGUNDO. Mediante oficio IFT/225/UC/DGA-VESRE/350/2015 de veintiuno de mayo de dos mil quince, la **DGAVER**, informó a la **DGV** que derivado de los trabajos de radiomonitorio y medición de parámetros técnicos al servicio de Radiodifusión en FM, el veintiocho de abril de dos mil quince, personal adscrito a esa Dirección General Adjunta, realizó con apoyo de una unidad móvil equipada con Sistema de Comprobación Técnica de las Emisiones "Scorpio", trabajos de radiomonitorio y vigilancia del espectro radioeléctrico en diversos puntos de la Ciudad de Huimanguillo, Estado de Tabasco, ubicando una antena transmisora en un predio que parece ser un plantío, en consecuencia no se identificó domicilio exacto, operando en la frecuencia **100.7 MHz**, tal como quedó asentado en el reporte de radiomonitorio número IFT/099/2015, y los niveles máximos de intensidad de señal fueron localizados en:

Domicilio conocido, dentro de la localidad de La Libertad, en el Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, en las inmediaciones de las coordenadas [REDACTED].

En ese tenor, la **DGAVER** solicitó realizar las acciones necesarias para que se llevara a cabo la visita de verificación en el domicilio referido, con la finalidad de constatar si el usuario de dicha frecuencia cuenta con el permiso o autorización correspondiente.

TERCERO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/2939/2015 de doce de agosto de dos mil quince, la Dirección General de Verificación ("DGV") dependiente de la Unidad de Cumplimiento del IFT, ordenó la visita de inspección-verificación al propietario, y/o poseedor y/o responsable, y/o encargado del inmueble, instalaciones y equipos de radiodifusión que opera la frecuencia **100.7 MHz**, en el

domicilio conocido dentro de la localidad de Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, con el objeto de "...constatar y verificar si los equipos y/o sistemas de radiodifusión y/o servicios de radiodifusión de LA VISITADA operan en la frecuencia **100.7 MHz** y en su caso si cuenta con Instrumento legal vigente emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que justifique su uso legal..."

CUARTO. El trece de agosto de dos mil quince, en cumplimiento al oficio precisado en el numeral inmediato anterior, los C.C. Diego Javier Anselmo y José Meza Acosta, en lo sucesivo **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en el domicilio precisado, levantándose el acta verificación ordinaria número **IFT/DF/DGV/702/2015** en lo sucesivo el **ACTA DE VERIFICACIÓN ORDINARIA**, en la cual se hizo constar que en el inmueble ubicado en domicilio conocido, Localidad de la Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, se detectaron equipos de radiodifusión operando en la frecuencia **100.7 MHz** sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente.

QUINTO. Del contenido del acta de verificación precisada en el numeral anterior, se desprende que la persona que atendió la visita se negó a proporcionar su nombre y manifestó bajo protesta de decir verdad "*soy ayudante del pastor* [REDACTED]", sin exhibir ningún documento para identificarse, toda vez que manifestó lo siguiente: "solo vengo a ayudar al pastor".

SEXTO. Mediante oficio **IFT/225/UC/DG-VER/5198/2015** de veinticinco de noviembre de dos mil quince, la **DGV** remitió al Titular de la Unidad de Cumplimiento un "*Dictamen por el cual se propone el inicio de PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIONES y la DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN, en contra del PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR, Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO DE LAS*

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN localizados en el inmueble ubicado en: Domicilio conocido, Localidad de Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco (donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión, operando la frecuencia de 100.7 MHz.) por presunta infracción del artículo 66 en relación con el artículo 75, y la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de la visita de Inspección y verificación que consta en el Acta Verificación ordinaria número IFT/DF/DGV/702/2015."

SÉPTIMO. En virtud de lo anterior, por acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el Instituto por conducto del Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de Imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en contra del PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR, Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN localizados en el inmueble ubicado en: Domicilio conocido, Localidad de Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco (donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión, operando la frecuencia de 100.7 MHz.), por presumirse la infracción al artículo 66 en relación con el 75, y la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la LFTyR, ya que de la propuesta de la DGV, se cuentan con elementos suficientes para acreditar la prestación del servicio de radiodifusión a través de la operación, uso y explotación de una vía general de comunicación (espectro radioeléctrico) consistente en la frecuencia 100.7 MHz por parte del presunto responsable, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente, de conformidad con lo establecido en la LFTyR.

OCTAVO. El diecinueve de enero de dos mil dieciséis, personal de este Instituto acudió al domicilio que ha quedado precisado a efecto de llevar a cabo la diligencia de notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionatorio,

y en dicho domicilio la notificadora fue atendida por una persona de nombre [REDACTED], quien manifestó en ese acto ser el propietario del inmueble, por lo que en tal sentido se notificó dicho acuerdo de inicio el día veinte del mismo mes y año, concediéndole un plazo de quince días, para que en uso del beneficio de la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("CPEUM") y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ("LFPA") de aplicación supletoria en términos del artículo 6, fracción IV, de la "LFTYR", expusiera lo que a su derecho conviniera y, en su caso aportara las pruebas con que contara.

El término concedido en el acuerdo de inicio para presentar manifestaciones y pruebas transcurrió del veintiuno de enero al doce de febrero de dos mil dieciséis, sin considerar los días veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de enero, cinco, seis y siete de febrero del de dos mil dieciséis, por ser sábados y domingos y día inhábil en términos del artículo 28 de la LFPA, asimismo, sin considerar el primero de febrero de dos mil dieciséis por encontrarse suspendidas las labores de este Instituto durante ese día en términos del "Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprueba su calendario anual de sesiones ordinarias y el calendario anual de labores para el año 2016 y principios de 2017" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de diciembre de dos mil quince.

NOVENO. De las constancias que forman el presente expediente se observó que, [REDACTED] ostentándose como responsable del inmueble que se localiza en la localidad de Libertad, Municipio de Huimanguillo del Estado de Tabasco donde se detectaron los equipos e instalaciones que operaban la radiodifusora de referencia, no obstante que dicha persona había manifestado ser el propietario de dicho inmueble, presentó escrito de manifestaciones y pruebas ante oficialía de partes el quince de febrero de dos mil dieciséis, el cual fue presentado fuera del plazo de quince días que le fue otorgado para tal efecto.

Por lo anterior, mediante acuerdos de dieciséis y de veintinueve de febrero del presente año, notificados el veinticinco de febrero de este año y el siete de marzo de dos mil dieciséis respectivamente por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este Instituto: (i) se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo en que se actúa y se tuvo por perdido su derecho para manifestar lo que a su derecho conviniera y ofrecer pruebas de su intención, así mismo, al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la sede de este Instituto se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciséis y se ordenó que las notificaciones subsecuentes se le practicaran a través de las listas diarias que al efecto se publican en el Instituto, y por corresponder al estado procesal que guardaba el presente asunto, con fundamento en el artículo 56 de la LFPA, se pusieron a su disposición los autos del presente expediente para que dentro del término de diez días hábiles formulara alegatos, en el entendido que transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos, se emitiría la Resolución que conforme a derecho correspondiera; (ii) se dio cuenta de su escrito presentado el quince de febrero de dos mil dieciséis y se hizo del conocimiento de [REDACTED] que toda vez que el mismo fue presentado en fecha posteriormente al vencimiento del término otorgado para realizar manifestaciones y pruebas se tenía por precluido su derecho en términos del proveído de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, no obstante lo anterior, esta Autoridad emitiría la resolución que conforme a derecho corresponda, tomando en consideración todo lo actuando en el expediente en que se actúa.

DÉCIMO. El término concedido a [REDACTED] para presentar alegatos transcurrió del veintiséis de febrero al diez de marzo de dos mil dieciséis, lo anterior sin considerar los días veintisiete y veintiocho de febrero, cinco y seis de marzo de dos mil dieciséis por ser sábados, domingos en términos del artículo 28 de la LFPA.

Sin embargo, de las constancias que forman el presente expediente se observa que no presentó sus alegatos, por lo que mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil dieciséis, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el quince de marzo del mismo año, se tuvo por perdido su derecho para ello y por lo tanto fue remitido el presente expediente a este órgano colegiado para la emisión de la Resolución que conforme a derecho resulte procedente.

CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

El Pleno del Instituto es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, con fundamento en los artículos 14, 16 y 28, párrafos, décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I de la CPEUM; 1, 2, 6, fracciones II, IV y VII, 7, 15, fracción XXX, 17, penúltimo y último párrafos, 66, 75, 297, primer párrafo, 298, inciso E), fracción I, y 305 de la LFTyR; 523 y 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación ("LVGC"); 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16 fracción X, 28, 49, 50, 59, 70, fracciones II y VI, 72, 73, 74 y 75 de la LFPA; y 1, 4, fracción I y 6, fracción XVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones ("ESTATUTO").

SEGUNDO. CONSIDERACIÓN PREVIA

La Soberanía del Estado sobre el espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, que es el medio en el que se propagan las señales de audio o audio y video asociados mediante la instalación, funcionamiento y operación de estaciones de radio y televisión se ejerce observando lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la CPEUM, los cuales prevén que el dominio directo de la Nación sobre el espectro radioeléctrico es inalienable e imprescriptible y que la explotación,

uso o aprovechamiento de dicho recurso por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, sólo puede realizarse mediante títulos de concesión otorgados por el IFT de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca la normatividad aplicable en la materia.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto de la CPEUM, el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, para lo cual tiene a su cargo, entre otros, la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones.

Conforme a lo anterior, el Instituto es el encargado de vigilar la debida observancia a lo dispuesto en las concesiones y autorizaciones que se otorguen para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, dedicadas al servicio público de radiodifusión como vehículo de información y de expresión, a fin de asegurar que se realice de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Bajo esas consideraciones, el ejercicio de las facultades de supervisión y verificación por parte del IFT, traen aparejada la relativa a imponer sanciones por el incumplimiento a lo establecido en las leyes correspondientes o en los respectivos títulos de concesión, asignaciones o permisos, con la finalidad de inhibir aquellas conductas que atenten contra los objetivos de la normatividad en la materia.

En ese sentido, la Unidad de Cumplimiento en ejercicio de sus facultades, llevó a cabo la sustanciación de un procedimiento y propuso a este Pleno imponer la sanción respectiva, así como declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación en contra de [REDACTED] al considerar que con su conducta violó los artículos 66 en relación con el 75 y se actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, todos de la LFTyR.

Ahora bien, para determinar la procedencia en la imposición de una sanción, la LFTyR aplicable en el caso en concreto, no sólo establece obligaciones para los concesionarios y permisionarios y para los gobernados en general, sino también señala supuestos de incumplimiento específicos, así como las consecuencias jurídicas a las que se harán acreedores en casos de infringir la normatividad en la materia.

Es decir, al pretender imponer una sanción, esta autoridad debe analizar minuciosamente la conducta que se le imputa a [REDACTED] y determinar si la misma es susceptible de ser sancionada en términos del precepto legal o normativo que se considera violado.

En este orden de ideas, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el desarrollo jurisprudencial de los principios del derecho penal en el campo administrativo sancionador irá formando los principios propios para este campo del *ius puniendi* del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido considerar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal, como lo es el principio de inaplicabilidad de la analogía en materia penal o tipicidad.

En ese sentido, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal al ser manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de éstos, en la Interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador, debe cuidarse el aducido principio de tipicidad, normalmente

referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que, si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

Así, en la especie se considera que la conducta desplegada por [REDACTED] vulnera el contenido del artículo 66 de la propia Ley, que al efecto establece que se requiere de concesión única otorgada por el IFT para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Desde luego, el mencionado precepto dispone lo siguiente:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

Lo anterior, en relación con el artículo 75, de la LFTyR, el cual dispone que corresponde al Instituto el otorgamiento de concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, para efectos de imponer la sanción que corresponda, resulta importante hacer notar que la comisión de la conducta antes referida, es susceptible de ser sancionada en términos de la fracción I, del inciso E del artículo 298, de la LFTyR, en el que se establece que la sanción que en su caso procede imponer corresponde a una multa por el equivalente al [REDACTED] hasta el [REDACTED] de los ingresos acumulables de la persona infractora.

En efecto, el artículo 298, inciso E), fracción I, de la LFTyR, establece lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E) Con multa por el equivalente de [REDACTED] hasta [REDACTED] de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización...

Asimismo, cabe señalar que la comisión de la conducta en análisis, actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305 de la LFTyR, misma que establece que la prestación de servicios de radiodifusión sin concesión trae como consecuencia la pérdida de los bienes en beneficio de la Nación. En efecto dicho precepto legal expresamente establece:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

De lo anterior, podemos concluir que el principio de tipicidad sólo se cumple cuando en una norma consta una predeterminación tanto de la infracción como de la sanción, es decir que la ley describa un supuesto de hecho determinado que permita predecir las conductas infractoras y las sanciones correspondientes para tal actualización de hechos, situación que se hace patente en el presente asunto.

Por otra parte, resulta importante mencionar que para el ejercicio de la facultad sancionadora, en el caso de incumplimiento de las disposiciones legales en materia de radiodifusión, el artículo 297, primer párrafo, de la LFTyR establece que para la imposición de las sanciones previstas en dicho cuerpo normativo, se estará a lo previsto por la LFPA, la cual prevé dentro de su Título Cuarto, Capítulo Único, el procedimiento para la imposición de sanciones administrativas.

En efecto, los artículos 70 y 72 de dicho ordenamiento, establecen que para la imposición de una sanción, se deben cubrir dos premisas: i) que la sanción se encuentre prevista en la ley y ii) que previamente a la imposición de la misma, la autoridad competente notifique al presunto infractor el inicio del procedimiento respectivo, otorgando al efecto un plazo de quince días para que el presunto infractor exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Así las cosas, al iniciarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra de [REDACTED], se presumió el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR ya que no contaba con la concesión correspondiente para la prestación del servicio público de radiodifusión, mediante el uso de la frecuencia 100.7 MHz.

En este sentido, a través del acuerdo de inicio de procedimiento, la Unidad de Cumplimiento dio a conocer a [REDACTED] la conducta que presuntamente viola disposiciones legales, así como la sanción prevista en ley por la comisión de la misma.

Por ello, se le otorgó un término de quince días hábiles para que en uso de su garantía de audiencia rindiera las pruebas y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera. Lo anterior de conformidad con el artículo 14 de la CPEUM, en relación con el artículo 72 de la LFPA.

Concluido el período de pruebas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la LFPA, la Unidad de Cumplimiento puso las actuaciones a disposición del interesado, para que éste formulara sus alegatos.

Una vez desahogado el período probatorio y vencido el plazo para formular alegatos, la Unidad de Cumplimiento remitió el expediente de mérito en estado

de Resolución al Pleno de este Instituto, quien se encuentra facultado para dictar la Resolución que en derecho corresponda.

Bajo ese contexto, el procedimiento administrativo de imposición de sanciones que se sustancia se realizó conforme a los términos y principios procesales que establece la **LFPA** consistentes en: i) otorgar garantía de audiencia al presunto infractor; ii) desahogar pruebas; iii) recibir alegatos, y iv) emitir la resolución que en derecho corresponda.¹

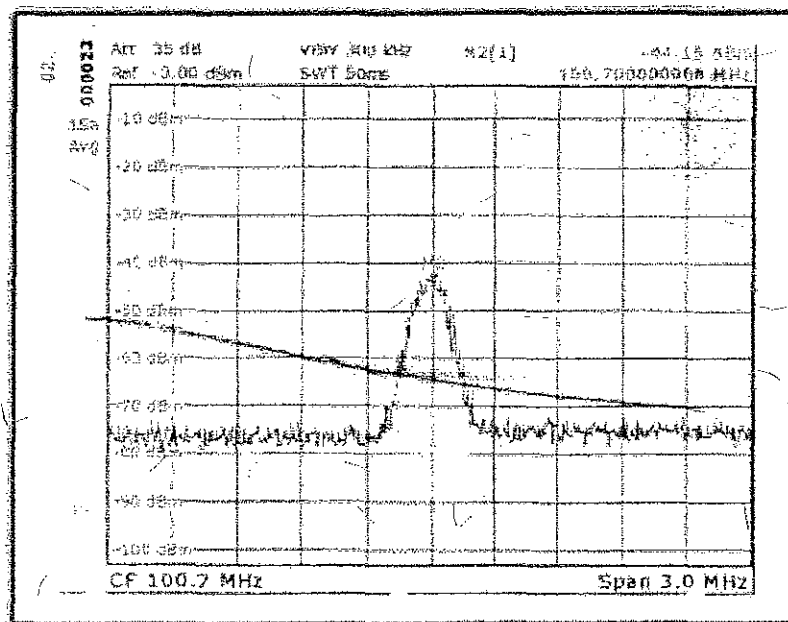
En las relatadas condiciones, al tramitarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción bajo las anteriores premisas, debe tenerse por satisfecho el cumplimiento de lo dispuesto en la **CPEUM**, las leyes ordinarias y los criterios judiciales que señalan cuál debe ser el actuar de la autoridad para resolver el presente caso.

TERCERO. HECHOS MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSICIÓN DE SANCIÓN Y DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la orden de Inspección-verificación **IFT/DF/DGV/702/2015** de doce de agosto de dos mil quince, dirigida al **"PROPIETARIO, Y/O POSEEDOR Y/O RESPONSABLE, Y/O ENCARGADO DEL INMUEBLE UBICADO EN: DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD DE LA LIBERTAD, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, ESTADO DE TABASCO así como de las instalaciones y equipos de radiodifusión localizados en el mismo"**, el trece de agosto de dos mil quince, **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en dicha población donde se realizó un monitoreo de radiofrecuencia en FM, corroborando que la frecuencia **100.7 MHz** estaba siendo utilizada, obteniéndose graficas de radiomonitoreo y grabación del audio de las transmisiones. Asimismo,

¹ Dichos principios tienen su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen la garantía de debido proceso.

a través del mismo analizador de espectro, se determinó la ubicación exacta de la estación de radiodifusión que operaba dicha frecuencia.



En consecuencia, en esa misma fecha, **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en el domicilio ubicado en domicilio conocido, Localidad de La Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, (lugar de origen de la señal) y levantaron el acta verificación ordinaria número IFT/DF/DGV/702/2015, dándose por terminada dicha diligencia el mismo día de su inicio.

Ahora bien, una vez que **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en el domicilio en el cual se localizó en operación la frecuencia **100.7 MHz**, solicitaron la identificación de la persona que recibió la visita, quien se negó a proporcionar su nombre y manifestó bajo protesta de decir verdad "soy ayudante del pastor [REDACTED]", quien además se negó a firmar copia de constancia de acuse de recibo de la

orden de visita de Inspección-verificación IFT/DF/DGV/702/2015 toda vez que manifestó: *"no puedo, porque no es mía la estación, yo solo vengo a ayudar con las plantas"* y señaló que no tenía a nadie para designar como testigos de asistencia; por lo que **LOS VERIFICADORES** nombraron como testigos a los CC. [REDACTED] y [REDACTED], quienes aceptaron tal cargo.

Una vez cubiertos los requisitos de ley, **LOS VERIFICADORES**, acompañados de la persona que ocupaba el inmueble en el que se practicó la diligencia y de los testigos de asistencia, procedieron a verificar las instalaciones de la radiodifusora (según se desprende del reporte fotográfico de las instalaciones ubicadas en el inmueble visitado) y encontraron instalados y en operación: una estructura de aproximadamente 60 metros de altura, donde se ubican cuatro elementos radiadores (antenas), que están conectados a una grabadora marca Sony, un monitor marca Samsung y a dos micrófonos sin marca; a lo que la persona que atendió la visita manifestó que *"el pastor [REDACTED], salió con dos aparatos que usa en la radio, antes que ustedes llegaran"*

Posteriormente, **LOS VERIFICADORES** solicitaron a la persona que atendió la visita, manifestara bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

- Que señalara qué persona es el propietario o poseedor de la estación de radiodifusión que transmite desde ese inmueble, a lo que la persona que recibió la visita respondió: *"yo sé que es del pastor [REDACTED]"*
- Indicara si sabía si desde ese inmueble se estaba transmitiendo una estación de radiodifusión, la cual opera la frecuencia 100.7 MHz, a lo que la persona que recibió la visita contestó que *"sí, es la del pastor"*.

Por lo anterior, se le solicitó a dicha persona informara si cuenta con concesión o permiso expedido por el Instituto Federal de Telecomunicaciones que amparara la instalación y operación de la frecuencia **100.7 MHZ**, ya que en términos del artículo 66 de la LFTyR, se requiere de concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, a lo que la visitada manifestó que no sabía; motivo por el cual **LOS VERIFICADORES** requirieron a la persona que atendió la visita que apagara y desconectara los equipos con los cuales transmitía en la frecuencia antes referida, a lo que la persona que atendió la diligencia manifestó *"si, pero tengo que cortar el cable"*.

En razón de que dicha persona no exhibió el respectivo título de concesión o permiso otorgado por autoridad competente que amparara o legitimara la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la frecuencia **100.7 MHz**, **LOS VERIFICADORES** procedieron al aseguramiento del equipo encontrado en el inmueble en donde se practicó la visita, quedando como Interventor especial (depositarlo) del mismo, **RAÚL LEONEL MULHIA ARZALUZ**, quien aceptó y protestó el cargo, situación que se hizo constar en el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA**, conforme a lo siguiente:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Grabadora	Marca Sony	Sin modelo	Sin número de serie	0106
Cables diversos y línea de transmisión	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0107
Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Dos micrófonos	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0108
Monitor	Samsung	Sin modelo	Sin número de serie	0109

Previamente a la conclusión de la diligencia, en términos del artículo 68 de la LFPA, LOS VERIFICADORES informaron a la persona que recibió la visita, que le asistía el derecho de manifestar lo que a sus intereses conviniera, respecto de los hechos asentados en el acta de verificación, a lo que dicha persona respondió "yo le entrego los papeles al pastor, pero que él haga lo que tenga que hacer".

Dado lo anterior, LOS VERIFICADORES con fundamento en el artículo 524 de la LVGC notificaron a la persona que recibió la diligencia, que tenía un plazo de diez días hábiles para que en ejercicio de su garantía de audiencia presentara por escrito las pruebas y defensas que estimara procedentes ante el Instituto.

El término de diez días hábiles otorgado a la visitada para presentar pruebas y defensas en relación a los hechos contenidos en el ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA transcurrió del catorce al veintisiete de agosto de dos mil quince, término que feneció sin que se presentara escrito alguno.

Derivado de lo anterior y una vez analizadas las constancias respectivas, la DGV estimó que con su conducta el probable responsable presumiblemente contravino lo dispuesto por el artículo 66 en relación con el 75, y actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, ambos de la LFTyR. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

A) Artículo 66 en relación con el 75 de la LFTyR.

El artículo 66 de la LFTyR, establece que: "Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

Por su parte el artículo 75 de la LFTyR, dispone que "Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se

otorgarán por el Instituto por un plazo de hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título."

En este sentido, dicha concesión para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, es el título habilitante que otorga a su titular la legitimación para prestar servicios de radiodifusión. Sin embargo, del informe de radiomonitorio así como de las grabaciones de audio realizadas por **LOS VERIFICADORES**, se demuestra fehacientemente que el probable responsable, al momento de la diligencia, se encontraba prestando el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **100.7 MHz** de la banda de Frecuencia Modulada en domicilio conocido, localidad de la Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, sin contar con el documento idóneo que ampare la prestación de dicho servicio.

Asimismo, con motivo del monitoreo realizado en dicho domicilio, se constató que el uso de la frecuencia **100.7 MHz** no estaba registrada a concesionario o autorizado alguno para esa entidad, dentro de la infraestructura de Estaciones de Radio FM publicada en la página web del Instituto.

Ahora bien, de los hechos que se hicieron constar en el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA** durante el desarrollo de la visita de Inspección-verificación, se desprende lo siguiente:

- a) En el **ACTA VERIFICACIÓN ORDINARIA** se hizo constar el uso de la frecuencia **100.7 MHz**, mediante una estructura de aproximadamente 60 metros de altura, donde se ubican cuatro elementos radiadores (antenas), así como de una grabadora marca Sony sin modelo ni número de serie, diversos cables y línea de transmisión, dos micrófonos sin marca ni modelo y un monitor marca Samsung sin modelo ni número de serie, mismos que se

encontraban instaladas y en operación, con lo que se acredita el uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico, correspondiente a la banda de FM, sin contar con concesión o permiso.

b) Del monitoreo realizado, así como de las grabaciones realizadas de la transmisión al momento de la diligencia se constata que se encontraba prestando servicios de radiodifusión mediante el uso de la frecuencia 100.7 MHz en la banda de FM.

c) En cuanto al cuestionamiento de LOS VERIFICADORES, respecto a que si contaba con concesión o permiso, para el uso de la frecuencia 100.7 MHz en la banda de FM, la persona que atendió la diligencia manifestó que desconocía si se contaba con alguno de ellos.

Por tanto, se acredita la infracción al artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR, toda vez que al momento de llevarse a cabo la visita de inspección-verificación, se detectó que en el inmueble visitado, se prestaba el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 100.7 MHz de FM, sin contar con la respectiva concesión, permiso o autorización emitida por autoridad competente.

B) Artículo 305 de la LFTyR.

En lo que respecta al artículo 305 de la LFTyR, dicha disposición establece que "Las personas que presten servicios de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones".

En efecto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana, con las restricciones establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables, pero para su aprovechamiento se requiere concesión otorgada conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Al respecto, durante la diligencia de inspección-verificación, **LOS VERIFICADORES**, realizaron el monitoreo de frecuencias en FM y corroboraron que la frecuencia **100.7 MHz** estaba siendo utilizada.²

Asimismo, se corroboró que el probable responsable se encontraba prestando el servicio de radiodifusión sin contar con el título de concesión, permiso o autorización respectivos. En consecuencia, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, de la LFTyR.

Ahora bien, en el dictamen remitido por la DGV se consideró que el probable responsable prestaba el servicio público de radiodifusión a través del uso, aprovechamiento o explotación de la banda de frecuencia **100.7 MHz**, sin contar con la concesión o permiso otorgado por la autoridad competente y en consecuencia el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento de imposición de sanción respectivo, mismo que se procede a resolver por éste Órgano Colegiado.

2 Sobre el particular, obtuvieron graficas de radiomonitorio y grabaciones del audio de las transmisiones, mismas que obran en el presente expediente.

Lo anterior considerando que de conformidad con los artículos 15, fracción XXX de la LFTyR y 41 en relación con el 44 fracción I, y 6, fracción XVII del ESTATUTO, el Titular de la Unidad de Cumplimiento tiene facultad para sustanciar procedimientos administrativos sancionatorios y el Pleno del Instituto se encuentra facultado para imponer las sanciones respectivas y declarar la pérdida de los bienes, instalaciones y equipos a favor de la Nación, por el incumplimiento e infracción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

En tal sentido, atendiendo a la propuesta formulada por la DGV, mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se dio inicio al procedimiento administrativo de imposición de sanción que nos ocupa, el cual fue notificado el veinte de enero del dos mil dieciséis a [REDACTED], quien manifestó ser el propietario del inmueble donde se operaba la estación, y en el mismo se le otorgó un plazo de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara procedentes.

CUARTO. MANIFESTACIONES Y PRUEBAS.

Mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciséis el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de imposición de sanción y la declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, en el que se le otorgó a [REDACTED] en su carácter de propietario del inmueble, un término de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso, aportara las pruebas con que contara con relación a los presuntos incumplimientos que se le imputaron.

Dicho acuerdo fue notificado el veinte de enero de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de quince días hábiles corrió del veintiuno de enero al doce de febrero de dos mil dieciséis.

De acuerdo a lo señalado en los Resultandos **OCTAVO** y **NOVENO** de la presente Resolución, y toda vez que [REDACTED] presentó pruebas y defensas fuera del plazo establecido para ello, por proveídos de dieciséis y de veintinueve de febrero del presente año, notificados por publicación de lista diaria de notificaciones en la página de este IFT los días veinticinco de febrero y el siete de marzo de dos mil dieciséis, respectivamente, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, por lo que se le tuvo por perdido su derecho a [REDACTED] para presentar pruebas y defensas de su parte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 72 de la LFPA y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles ("CFPC"), de aplicación supletoria en términos de los artículos 6, fracciones IV y VII de la LFTyR y 2 de la LFPA.

Sin embargo a efecto de no dejar en estado de indefensión a [REDACTED] se realiza un resumen de las consideraciones contenidas en dicho escrito, para posteriormente ocuparse del análisis de las mismas.

- I. Manifiesta que no realizó manifestación alguna respecto del acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015 toda vez que carecía de sustento jurídico, en virtud de que *"no reunía los requisitos señalados en los artículos 303, 304 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles en vigor en el Estado de Tabasco (sic)"*.
- II. En relación con el punto siete de los antecedentes, es improcedente que el C. Raúl Leonel Mulhía Arsaluz (depositario), subdirector de supervisión de este IFT, procediera al aseguramiento de los equipos encontrados en el

inmueble como son: "GRABADORA, CABLES DIVERSOS Y LINEAS DE TRANSMISIÓN, DOS MICROFONOS, MONITOR" sin antes haber oído en juicio a los supuestos responsables, violando los requisitos señalados en el artículo 16 Constitucional.

- III. Es Improcedente el aseguramiento de los bienes muebles descritos, toda vez que como se señala en el informe de radio monitoreo IFT/099/2015 de cinco de mayo de dos mil quince, la antena transmisora se ubicó en un predio que parece ser un plantío ubicado en las coordenadas [REDACTED] [REDACTED], sin identificarse dominio (sic) exacto. Y no estar funcionando ni encontrarse transmisor de radio para decir que estaba en operación.

Por lo anterior, a efecto de cumplir con los principios de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con el principio de exhaustividad en el dictado de las resoluciones administrativas, de conformidad con los artículos 13 y 16, fracción X, de la LFPA, este Pleno del IFT se pronuncia respecto de las alegaciones presentadas por [REDACTED] en los siguientes términos:

El Pleno de este Instituto considera infundada e inoperante, la manifestación de [REDACTED], en la que señala que no realizó pronunciamiento alguno, respecto a lo asentado en el acta de verificación IFT/DF/DGV/702/2015, ya que la misma carecía de sustento jurídico toda vez que no reunía los requisitos señalados en los artículos 303, 304 y 311 del CFPC.

En principio, debe decirse que dicho argumento resulta inoperante en virtud de que [REDACTED], realiza una manifestación genérica en el sentido de señalar que el acta de verificación IFT/DF/DGV/702/2015, no reunía los requisitos señalados en los artículos 303, 304 y 311 del CFPC, sin que al efecto refiera de qué manera es que resultaban aplicables tales preceptos al acta de verificación

IFT/DF/DGV/702/2015, como tampoco señala cuales fueron los preceptos que se aplicaron en su lugar o que fueron aplicados indebidamente y menos aún señala cual es el agravio que la presunta omisión de que el acta de nuestra atención no reúna los requisitos señalados en los artículos 303, 304 y 311 del CFPC le genera, lo que trae como consecuencia que al ser genérico su argumento resulte inatendible y en consecuencia infundado.

Asimismo, cabe señalar que dicha manifestación resulta ineficaz para desvirtuar el hecho de que se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva emitida por autoridad competente, sino que únicamente se advierte de la misma, que [REDACTED] cita diversos artículos con los cuales pretende realizar manifestaciones respecto de la visita de verificación llevada a cabo el trece de agosto de dos mil quince así como de los hechos asentados dentro del acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015, mismas que no realizó dentro del plazo que le fue otorgado y que resultan infundadas en sí mismas para controvertir la legalidad del acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015.

Ahora bien, de dicha manifestación tampoco se advierte que exponga ningún argumento de derecho por el cual señale cuales fueron los requisitos que presuntamente omitió esta autoridad al levantar el acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015, además de que hace una incorrecta interpretación respecto de los requisitos que debe reunir un acta circunstanciada llevada a cabo con motivo de una visita de verificación, confundiendo su fundamento con el invocado en los artículos 303, 304 y 311 del CFPC, los cuales señalan lo siguiente:

ARTICULO 303.- Las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán, lo más tarde, el día siguiente al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, cuando el tribunal, en éstas, no dispusiere otra cosa

ARTICULO 304.- La resolución en que se mande hacer una notificación, citación o emplazamiento, expresará el objeto de la diligencia y los nombres de las personas con quienes ésta deba practicarse.

ARTICULO 311.- Para hacer una notificación personal, y salvo el caso previsto en el artículo 307, se cerciorará el notificador, por cualquier medio, de que la persona que deba ser notificada vive en la casa designada, y, después de ello, practicará la diligencia, de todo lo cual asentará razón en autos.

De lo anterior se observa, que los artículos antes citados, propiamente hacen referencia al capítulo de notificaciones establecido en el **CFPC**, mismos que como se puede corroborar, establecen la forma y requisitos que deben contener las notificaciones, citaciones y emplazamientos, y no así los referentes a las actas de verificación, sin que al efecto en sus manifestaciones se pueda advertir tampoco que hubiera impugnado la notificación del acta de verificación, pues de su argumento no se desprende agravio alguno al respecto.

Resulta preciso señalar que al levantarse el acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015 de trece de agosto de dos mil quince, la cual se realizó en cumplimiento al oficio IFT/228/UC/DG-VER/2938/2015 que contenía la orden de visita de inspección-verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015, este **IFT** actuó en estricto apego a lo establecido en la normatividad aplicable, toda vez de acuerdo al ámbito de sus facultades de verificación establecidas en la **LFTyR** fue que se llevó a cabo la visita de inspección-verificación y el levantamiento del acta correspondiente por parte de **LOS VERIFICADORES**, la cual cumple con todos los requisitos establecidos en el artículos 66 de la **LFPA**, en virtud de que se levantó el acta circunstanciada correspondiente en presencia de los CC. [REDACTED] y [REDACTED] designados como testigos por **LOS VERIFICADORES**, toda vez que la persona que atendió la visita se negó a designar alguno, y en la que además se hicieron constar los todos requisitos que debe contener un acta en cumplimiento a lo señalado en el artículo 67 de esa **LFPA**.

Por tanto, si bien es cierto que [REDACTED] consideró que el acta en comento carecía de sustento jurídico, no menos cierto es que éste tuvo el momento procesal oportuno dentro de la verificación así como dentro del plazo que le fue otorgado por este IFT, para exponer los argumentos de derecho que considerara convenientes y que además con dicha manifestación no desvirtúa la conducta que le fue imputada, como lo es el hecho de que se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva emitida por autoridad competente.

Por cuanto hace a lo manifestado respecto de que resulta improcedente que el C. Raúl Leonel Mulhía Arzaliz (depositario), subdirector de supervisión de este IFT, procediera al aseguramiento de los equipos encontrados en el inmueble sin antes haber oído a juicio a los responsables, violando los requisitos señalados en el artículo 16 Constitucional, se comenta lo siguiente:

Resulta igualmente infundada e inoperante tal manifestación, en virtud de que resulta ineficaz para desvirtuar el hecho de que en el inmueble propiedad de [REDACTED] se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva emitida por la autoridad correspondiente, además de que tanto en el desahogo de la visita de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015 de trece de agosto de dos mil quince, como una vez concluida la misma, se le dio garantía de audiencia, pues es el caso que durante el desarrollo de la visita de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015 a la persona que la recibió se le dio siempre y en todo momento el uso de la voz para que ejerciera su garantía de audiencia y una vez concluida la visita, se le otorgó un plazo de diez días hábiles para que manifestara lo que a su derecho e interés convenía en relación con la visita de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/702/2015.

Por otro lado, cabe señalar que derivado de que la persona que atendió la diligencia no acreditó contar con el respectivo título de concesión o permiso otorgado por autoridad competente que amparara o legitimara la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso y aprovechamiento de la frecuencia 100.7 MHz, fue que se procedió al aseguramiento de los equipos encontrados en el inmueble en donde se practicó la visita, consistentes en: una grabadora marca Sony sin modelo ni número de serie, diversos cables y línea de transmisión, dos micrófonos sin marca ni modelo y un monitor marca Samsung sin modelo ni número de serie, lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación (en adelante la "LVGC"), el cual establece lo siguiente:

"Artículo 524.- Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se observará el procedimiento siguiente: Tan luego como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenga conocimiento de la infracción, procederá al aseguramiento de las obras ejecutadas, las instalaciones establecidas y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación de la vía de comunicación, ocupación de la zona federal o playas, de las vías flotables o navegables, poniéndolos bajo la guarda de un interventor especial, previo (sic) inventario que se formule.

Posteriormente al aseguramiento se concederá un plazo de diez días al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que estime pertinentes en su caso; y pasado dicho término la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dictará la resolución que corresponda.

En este orden de ideas, la LVGC es clara al establecer que al tener conocimiento de una presunta infracción se procederá al aseguramiento de los bienes utilizados para llevar a cabo la misma, y que posteriormente a ello, se concederá un plazo de diez días al presunto infractor para que presente las pruebas y defensas que considere pertinentes, en ese sentido tal y como se desprende del acta de verificación, al llevarse a cabo la visita de inspección-verificación se cumplió cabalmente con lo establecido en el citado artículo, y toda vez que LA VISITADA no exhibió el documento habilitante para prestar servicios de radiodifusión, fue que LOS VERIFICADORES designaron al C. Raúl Leónel Mulhía Arzuluz, subdirector de supervisión de este IFT como interventor especial (depositario) para resguardar

los bienes asegurados, y posteriormente a ello con fundamento en el artículo 524 de la LVGC se otorgó un plazo de diez días hábiles para que presentara las pruebas y defensas que estimara procedentes, tal y como se advierte de la foja 13 anverso y reverso del expediente en el que se actúa, cuyas imágenes son las siguientes:

En virtud de que la persona que recibe la visita, no presenta el instrumento legal para acreditar el legal uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico y la instalación y operación de equipos y sistemas de radiodifusión para el uso de la frecuencia 100.7 MHz, LOS VERIFICADORES requieren a la persona que recibe la visita, **apague y desconecte** los equipos que se encuentran instalados y operando con los cuales transmite en la frecuencia antes referida, manifestando **"sí, pero tengo que cortar el cable"**.

Atendiendo a que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la Nación cuya titularidad y administración corresponden al Estado y que el mismo constituye una vía general de comunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 6 fracción II, 66, 67 y 69 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, éste último artículo de aplicación supletoria por lo que respecta al procedimiento de aseguramiento y 43 fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en virtud de que la persona que atiende la presente diligencia no presenta el instrumento legal vigente que ampare el uso legal de la frecuencia 100.7 MHz y conforme a lo indicado en la orden de inspección- verificación, en este acto LOS VERIFICADORES realizan el aseguramiento de los equipos.

La persona designada como interviniente especial (depositario) acepta el nombramiento y protesta el desempeño del cargo conferido, haciéndose sabedor de las obligaciones y responsabilidades civiles y penales que con él contrae en términos de la legislación aplicable, y señala como domicilio de resguardo de los bienes asegurados, el inmueble ubicado en Av. Telecomunicaciones S/N, col. Leyes de Reforma, Delegación, Iztapalapa.- Con fundamento en el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, LOS VERIFICADORES hacen saber a la persona que recibe la visita, para que manifieste en este acto lo que a su derecho convenga respecto de los hechos asentados en la presente acta, con el apercibimiento de que haga uso o no del derecho, se dictará lo que en derecho corresponda, a lo que la persona que recibe la visita manifiesta: **"Yo le entrego los papeles al pastor, pero que él haga lo que tenga que hacer"**.

Acto seguido, con fundamento en el artículo 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, LOS VERIFICADORES indican a la persona que recibe la visita para que dentro del término de DIEZ días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la presente actuación, presente por escrito las pruebas y defensas que estime procedentes ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 1143, colonia Nochebuena, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03720, en la Ciudad de México, Distrito Federal, con el apercibimiento de que haga uso o no del derecho que le asiste, se dictará lo que corresponda.

No habiendo otro acto que desahogar por las partes que intervienen en la presente, siendo las 12 horas con 45 minutos del día 13 del mes de agosto del año 2015, se da por terminada la misma, por lo que leída por los que en ella intervinieron, la firman de

De lo señalado en el acta de verificación, claramente se puede advertir que esta autoridad actuó en apego a lo establecido en la legislación vigente y que posteriormente al aseguramiento de los equipos, se otorgó al infractor un plazo de diez días hábiles para que manifestara y aportara las pruebas que a su derecho convinieran, respetando así en todo momento sus garantías constitucionales establecidas en el artículo 16 de la CPEUM.

Por cuanto hace a la manifestación en el sentido de que resulta improcedente el aseguramiento de los bienes asegurados, toda vez que como se señala en el Informe de radio monitoreo IFT/099/2015 de cinco de mayo de dos mil quince, la antena transmisora se ubicó en un predio que parece ser un plantío ubicado en las coordenadas [REDACTED] sin identificarse domicilio exacto. Y no estar funcionando ni encontrarse transmisor de radio para decir que estaba en operación.

Resulta infundado e inoperante tal manifestación, en virtud de que con la misma no se desvirtúa el hecho de que en el inmueble propiedad de [REDACTED] se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva emitida por la autoridad correspondiente.

Lo anterior considerando que, si bien es cierto de los trabajos de radiomonitoreo y vigilancia realizados por la DGAVER, se ubicó una antena transmisora en un predio que toda vez que parece ser un plantío no se pudo identificar un domicilio exacto operando la frecuencia 100.7 MHz, no menos cierto es, que del reporte de radiomonitoreo número IFT/0969/2015 se advirtió por los niveles máximos de intensidad de la señal que la misma provenía de las inmediaciones de las coordenadas [REDACTED] por lo anterior, LOS VERIFICADORES llevaron a cabo trabajos de radiomonitoreo correspondientes a efecto de

determinar la ubicación del domicilio donde presuntamente se transmitía la frecuencia 100.7 MHz.

En consecuencia, **LOS VERIFICADORES** se constituyeron en el inmueble ubicado en las inmediaciones de las coordenadas antes citadas en la localidad de la Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco cerciorándose de ser el domicilio donde se transmitía la frecuencia y por lo anterior se llevó a cabo en ese lugar la visita de inspección-verificación el trece de agosto de dos mil quince, levantándose el acta correspondiente, de la cual como ya se ha estudiado en la presente Resolución, se desprendió que en dicho inmueble, que ahora se sabe es propiedad de [REDACTED] se encontraba prestando el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 100.7 MHz de la banda de FM sin contar con concesión, permiso o autorización que justificara el legal uso y aprovechamiento de la misma a través de los equipos instalados y en operación consistentes en: una grabadora marca Sony sin modelo ni número de serie, diversos cables y línea de transmisión, dos micrófonos sin marca ni modelo y un monitor marca Samsung sin modelo ni número de serie.

En razón de lo anterior, atendiendo a lo establecido en el artículo 524 de la LVGC se procedió al aseguramiento de los equipos utilizados para la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso y aprovechamiento de la frecuencia 100.7 MHz, toda vez que éstos fueron encontrados instalados y en operación, por lo que no se desprende que haya sido impropio el aseguramiento de dichos equipos.

QUINTO. ALEGATOS

Mediante el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, notificado a [REDACTED], por lista el veinticinco de febrero de este año, se le concedió un

plazo de diez días hábiles para formular alegatos, el cual corrió del veintiséis de febrero al diez de marzo de dos mil dieciséis.

De las constancias que forman parte del presente expediente, se observa que para tal efecto, [REDACTED] no presentó alegatos ante éste IFT.

De acuerdo a lo señalado en el Resultando DÉCIMO de la presente Resolución, por proveído de catorce de marzo de dos mil dieciséis, publicado en la lista diaria de notificaciones en la página del Instituto el quince de marzo de dos mil dieciséis, se tuvo por perdido el derecho de [REDACTED] para formular alegatos de su parte con fundamento en los artículos 72 de la LFPA y 288 del CFPC.

Por lo anterior, al no existir análisis pendiente por realizar se procede a emitir la presente resolución atendiendo a los elementos que causan plenitud convictiva en esta autoridad, cumpliendo los principios procesales que rigen todo procedimiento.

Sirve de aplicación por analogía la siguiente Jurisprudencia que a su letra señala:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA-PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y

desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Época: Décima Época, Registro: 2005716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396."

En tales consideraciones, debe tomarse en cuenta que:

1. Se confirmó el uso de la frecuencia 100.7 MHz en el inmueble ubicado en domicilio conocido en la Localidad de la Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión que operaba dicha frecuencia, con el equipo consistente en: una estructura de aproximadamente 60 metros de altura, donde se ubican cuatro elementos radiadores (antenas), que estaban conectadas a una grabadora marca Sony sin modelo ni número de serie, diversos cables y línea de transmisión, dos micrófonos sin marca ni modelo y un monitor marca Samsung sin modelo ni número de serie.

2. Se detectó la prestación del servicio público de radiodifusión del cual no se acreditó tener concesión o permiso expedido por autoridad competente que amparara o legitimara la prestación de dicho servicio.
3. Existe manifestación expresa en el procedimiento sancionatorio por parte de [REDACTED] respecto a ser el propietario donde se detectaron instalados y en operación los equipos con los que se llevaban a cabo las transmisiones de la radiodifusora en comento.

En ese sentido, este Pleno del Instituto considera que existen elementos suficientes para determinar que en el inmueble propiedad de [REDACTED] efectivamente se prestaba el servicio público de radiodifusión de forma ilegal, en franca violación del artículo 66 en relación con el 75, de la LFTyR.

Se afirma lo anterior, en virtud de que del análisis de la conducta desplegada en relación con lo establecido en los preceptos legales que se estiman transgredidos claramente se puede advertir que se surten todos los supuestos previstos por los mismos.

Así, el presente procedimiento administrativo de imposición de sanción y declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación que se resuelve en contra de [REDACTED], se inició de oficio por el presunto incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, y actualización de la hipótesis prevista en el artículo 305, ambos de la LFTyR, mismos que establecen:

"Artículo 66. Se requerirá concesión única para prestar todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión."

"Artículo 75. Las concesiones para usar, aprovechar y explotar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico de uso determinado y para la ocupación y explotación de recursos orbitales, se otorgarán por el Instituto por un plazo de

hasta veinte años y podrán ser prorrogadas hasta por plazos iguales conforme a lo dispuesto en el Capítulo VI de este Título."

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

Del análisis de los preceptos transcritos, se desprende que la conducta susceptible de ser sancionada es la prestación de servicios de radiodifusión sin contar con concesión o autorización emitida por la autoridad competente, por lo que con el fin de cumplir a cabalidad con el principio de tipicidad se debe analizar si la conducta desplegada se adecua a lo señalado por la norma.

En ese sentido, con el fin de establecer lo que debe entenderse por la prestación de un servicio de radiodifusión, resulta importante considerar lo señalado por las fracciones LIV y LXV del artículo 3 de la LFTyR, mismas que señalan lo siguiente:

"Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

LIV. Radiodifusión: Propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, incluidas las asociadas a recursos orbitales, atribuidas por el Instituto a tal servicio, con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello;

LXV. Servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión: Servicios de interés general que prestan los concesionarios al público en general con fines comerciales, públicos o sociales de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la Ley Federal de Competencia Económica;

De lo señalado por la LFTyR se desprenden los elementos que componen el concepto de radiodifusión, mismos que deben ser analizados a la luz de la conducta desplegada para sustentar la determinación de incumplimiento.

En ese sentido las premisas del concepto de radiodifusión son las siguientes:

1. La propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado.
2. El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico atribuidas por el Instituto a tal servicio.
3. La población las puede recibir de manera directa y gratuita utilizando los dispositivos idóneos para ello.

La primera y la tercera de las premisas se encuentran plenamente acreditadas en el procedimiento administrativo en que se actúa al existir constancia en autos del disco compacto remitido como adjunto a la propuesta de inicio del procedimiento, en el cual se contienen las grabaciones realizadas al momento de realizar el monitoreo del espectro radioeléctrico, de las cuales se desprende que efectivamente se estaban transmitiendo señales de audio, mismas que pueden ser recibidas de manera directa por la población con el simple hecho de contar con el medio idóneo, que en el presente caso lo constituye un radio receptor.

De igual forma, la primera y segunda de las premisas quedaron plenamente acreditadas durante el desarrollo de la diligencia de verificación, ya que derivado del monitoreo se detectó el uso de la frecuencia 100.7 MHz a través de una grabadora marca Sony sin modelo ni número de serie, diversos cables y línea de transmisión, dos micrófonos sin marca ni modelo y un monitor marca Samsung sin modelo ni número de serie, con lo que se acredita la propagación de ondas y el uso de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico.

Ahora bien, de la definición de servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión se desprenden los siguientes elementos:

- ✓ Son servicios de interés general.
- ✓ Son prestados por concesionarios.

- ✓ Son para el público en general.
- ✓ Tienen fines comerciales, públicos o sociales.
- ✓ Se prestan conforme a las leyes aplicables

Del análisis de dichos elementos se desprende que en el presente asunto [REDACTED] no acreditó tener el carácter de concesionario, además de que en los archivos del IFT no obra concesión o permiso otorgado para operar esa frecuencia en dicha localidad.

Adicionalmente la frecuencia utilizada para esa entidad no se encuentra registrada en la infraestructura de Estaciones de Radio de Frecuencia Modulada ("FM") publicada en la página Web del Instituto, circunstancia que por sí misma constituye un hecho notorio que pone de manifiesto que los servicios no se prestaban conforme a la ley, no obstante que se encontraban a disposición del público en general por lo detectado y grabado en el monitoreo.

Ahora bien, otro elemento que resulta importante analizar es que con independencia de la finalidad de la estación de radiodifusión, para poder prestar dicho servicio se deben de cumplir con los requisitos previstos por la Ley, esto en virtud de que como se puede advertir de lo señalado por la norma, no existe la necesidad de acreditar un uso comercial, público o social.

Así las cosas, en el presente asunto durante la Visita de Inspección-Verificación se acreditó la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso de la frecuencia **100.7 MHz** con los siguientes equipos instalados y en operación: una estructura de aproximadamente 60 metros de altura, donde se ubican cuatro elementos radiadores (antenas), conectados a una grabadora marca Sony sin modelo ni número de serie, diversos cables y línea de transmisión, dos micrófonos sin marca ni modelo y un monitor marca Samsung sin modelo ni número de serie; [REDACTED] en su carácter de propietario del inmueble donde se detectaron instalados y en operación dichos equipos, no acreditó contar con concesión o

permiso que acreditara la prestación del servicio público referido; por tanto, se considera que es responsable de la violación a lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75, y dicha conducta es sancionable en términos de la fracción I del inciso E) del artículo 298 de la LFTyR. Asimismo, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de dicho ordenamiento y lo procedente es declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes empleados en la comisión de la infracción.

En efecto, el artículo 298 inciso E), fracción I de la LFTyR, establece lo siguiente:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:

(...)

E. Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

(...)

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización, o"

En consecuencia, y considerando que [REDACTED] es responsable de la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 100.7 MHz, sin contar con concesión, permiso o autorización correspondiente que lo habilite para tal fin, lo procedente es imponer la sanción que corresponda en términos del citado artículo 298, inciso E), fracción I de la LFTyR y conforme al citado artículo 305 procede declarar la pérdida de los equipos detectados durante la visita de inspección-verificación, consistentes en:

- a) Una grabadora marca Sony sin modelo ni número de serie,
- b) Diversos cables y línea de transmisión,
- c) Dos micrófonos sin marca ni modelo y
- d) Un monitor marca Samsung sin modelo ni número de serie.

Lo anterior, toda vez que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público de la Federación, el cual es un recurso limitado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la CPEUM, corresponde al Estado a través del Instituto salvaguardar su uso, aprovechamiento y explotación en beneficio del Interés público.

Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios judiciales:

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO. La Sección Primera, Apartado 1-5, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a las ondas radioeléctricas u ondas hertzianas como las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. Por su parte, el artículo 3o., fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. En ese tenor, si se relaciona el concepto de ondas radioeléctricas definido por el derecho internacional con el del espectro radioeléctrico que define la Ley Federal de Telecomunicaciones, se concluye que este último forma parte del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, sobre el que la Nación ejerce dominio directo en la extensión y términos que fije el derecho internacional conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que, como tal, en términos de la Ley General de Bienes Nacionales, está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana con las restricciones establecidas en las leyes y reglamentos administrativos aplicables, pero para su aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o permiso otorgados conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Época: Novena Época, Registro: 170757, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 65/2007, Página: 987"

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SU CONCEPTO Y DISTINCIÓN CON RESPECTO AL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. El artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación, sin guía artificial de ondas electromagnéticas, cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los tres mil gigahertz. Así, las frecuencias se agrupan convencionalmente en bandas, de acuerdo a sus características, y el conjunto de éstas constituye el espectro radioeléctrico, el cual integra una parte del espectro electromagnético utilizado como medio de transmisión para distintos servicios de telecomunicaciones, y es un bien del dominio público respecto del cual no debe haber barreras ni exclusividad que impidan su funcionalidad y el beneficio colectivo. Cabe señalar que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y las frecuencias que lo componen son las que están en el rango entre los tres hertz y los tres mil gigahertz y, en esa virtud, su explotación se realiza aprovechándolas directamente o concediendo el aprovechamiento mediante la asignación a través de concesiones.

Época: Décima Época, Registro: 2005184, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.72ªA (10a.), Página: 1129"

En ese sentido, se concluye que [REDACTED] en su carácter de propietario del inmueble donde se detectaron instalados y en operación diversos equipos destinados a la prestación del servicio de radiodifusión es administrativamente responsable de la prestación de dicho servicio a través del uso del espectro radioeléctrico en la frecuencia 100.7 MHz, en el Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, sin contar con la concesión, permiso o autorización respectiva, por lo que en tal sentido es responsable de la violación al artículo 66 en relación con el 75, y lo procedente es imponer una multa en términos del artículo 298, inciso E), fracción I, ambos de la LFTyR. De igual forma con dicha conducta se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 del mismo ordenamiento y en consecuencia procede declarar la pérdida a favor de la Nación de los bienes y equipos empleados en la comisión de dicha infracción.

Cabe señalar que si bien es cierto que en el presente asunto no se acreditó que los bienes asegurados fueran propiedad de [REDACTED] también lo es que la posesión de un bien hace presumir la propiedad del mismo y que en términos del

artículo 802 del Código Civil Federal, la posesión de un inmueble hace presumir la posesión de los bienes muebles que se encuentran dentro de él; de donde se concluye que la propiedad del inmueble por parte de [REDACTED], hace presumir en su favor la propiedad de los bienes en el contenidos.

SEXTO. DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA SANCIÓN.

El incumplir con el artículo 66 en relación con el 75, ambos de la LFTyR, resulta sancionable en términos de lo previsto en el artículo 298, apartado E), fracción I de la citada Ley, que a la letra señala:

"Artículo 298. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley y a las disposiciones que deriven de ella, se sancionarán por el Instituto de conformidad con lo siguiente:...

E) Con multa por el equivalente de 6.01% hasta 10% de los ingresos de la persona infractora que:

I. Preste servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin contar con concesión o autorización..."

En ese sentido, a efecto de contar con la información necesaria para emitir la determinación que en derecho correspondiera, en el acuerdo de inicio de procedimiento se solicitó a [REDACTED] que acreditara sus ingresos acumulables del ejercicio dos mil catorce para estar en posibilidad de calcular la multa correspondiente en términos de la LFTyR, sin embargo el presunto infractor no proporcionó a esta autoridad dicha información.

En ese sentido, al no contar con la información solicitada, a efecto de determinar el monto de la multa, resulta procedente acudir al mecanismo establecido en el artículo 299, párrafo tercero, fracción IV, de la LFTyR, que establece:

"Artículo 299. En el caso de infractores que, por cualquier causa, no declaren o no se les hayan determinado ingresos acumulables para efectos del Impuesto sobre la Renta o que habiéndoseles solicitado no hubieren proporcionado la información fiscal a que se refiere el artículo que antecede se les aplicaran las siguientes las multas siguientes:

IV. En los supuestos del artículo 298, incisos D) y E), multa hasta por el equivalente a ochenta y dos millones de veces el salario mínimo.

Para calcular el importe de las multas referidas en razón de días de salario mínimo, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal del día que se realice la conducta o se actualice el supuesto.

(Énfasis añadido)

Ahora bien, para estar en posibilidad de determinar la multa que en derecho corresponda, esta autoridad debe atender a lo establecido en el artículo 301 de la LFTyR, que a la letra señala:

"Artículo 301. Para determinar el monto de las multas establecidas en el presente Capítulo, el Instituto deberá considerar:

I. La gravedad de la infracción;

II. La capacidad económica del infractor;

III. La reincidencia, y

IV. En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio, el cual podrá considerarse como atenuante de la sanción a imponerse."

Para estos efectos, esta autoridad considera que de conformidad con las disposiciones referidas y en atención al principio de exacta aplicación de la ley, la sanción que en todo caso se imponga debe ser congruente con el análisis que se efectúe conforme a los elementos precisados en el precepto legal antes indicado.

De esta manera, al encontrarse establecidas por el legislador el conjunto de reglas encaminadas a individualizar el monto de la sanción aplicable por la comisión de la conducta y al no existir norma alguna que obligue a adoptar algún procedimiento en específico para la cuantificación de la multa, la autoridad puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para esos efectos gozando de un cierto grado de discrecionalidad para determinarla, siempre y cuando se motive de manera adecuada el grado de reproche imputado al inculcado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia:

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. DEBE SER CONGRUENTE CON EL GRADO DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCUPLADO, PUDIENDO EL JUZGADOR ACREDITAR DICHO EXTREMO A TRAVÉS DE CUALQUIER MÉTODO QUE RESULTE IDÓNEO PARA ELLO. De conformidad con los artículos 70 y 72 del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, el Juez deberá individualizar la pena, dentro de los límites previamente fijados por el legislador, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente. De ahí que la discrecionalidad de la que goza aquél para cuantificar las penas esté sujeta a que motive adecuadamente el lugar o escalafón en el que se ubica el grado de reproche imputado al inculpaado, dentro del parámetro que va de una culpabilidad mínima a una máxima, para así poder demostrar, en cumplimiento a las normas que rigen la individualización de la pena y con el principio de exacta aplicación de la ley, que el quantum de la pena resulta congruente con el grado de reproche del inculpaado, por encontrarse ambos en igual lugar dentro de sus respectivos parámetros. Para lograr tal fin, el juzgador puede valerse de cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe norma alguna que lo constriña a adoptar algún procedimiento matemático en específico, entre los diversos que resulten adecuados para desempeñar dicha labor.

Época: Novena Época, Registro: 176280, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Torno XXIII, Enero de 2006, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 157/2005, Página: 347"

(Énfasis añadido)

En ese sentido, con el fin de cumplir con lo establecido en la Ley, esta autoridad procede a analizar cada uno de los elementos que se deben de tomar en consideración para estar en posibilidad de determinar el monto de la sanción que se debe aplicar.

Ahora bien, resulta pertinente precisar que si bien es cierto el artículo 301 de la LFTyR, establece como elementos a considerar para efectos de fijar el monto de la multa los siguientes: a) La gravedad de la infracción; b) La capacidad económica del infractor; c). La reincidencia; y d). En su caso, el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento sancionatorio; de los mismos solo resultan atendibles para la fijación primigenia de la multa los dos primeros, es decir, la gravedad de la infracción y la capacidad

económica del infractor; no así la reincidencia y el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento, lo anterior en virtud de que en tratándose de la reincidencia, la misma es un factor que en términos del artículo 300 de la LFTyR, permitiría duplicar la multa impuesta para el caso de que se actualizara dicha figura, lo que implica que de suyo no es un factor que incida en la determinación de la multa, sino que opera como una agravante para imponer una sanción más severa para quien ha vuelto a infringir la normatividad de la materia; en tanto que, a contrario sensu, en caso de actualizarse el cumplimiento espontáneo de las obligaciones que dieron origen al procedimiento, permite contar con una atenuante que traería como consecuencia la disminución en el monto de la sanción originalmente decretada.

Así las cosas y conforme a lo expuesto, este Órgano Colegado estima procedente llevar a cabo el análisis de la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor como factores para determinar el monto de la sanción a imponer, ejercicio que se realiza como sigue:

I. Gravedad de la infracción.

La LFTyR no establece medio alguno para determinar la gravedad; en consecuencia esta autoridad considera conveniente que, para determinar cuándo una conducta es grave y en qué grado lo es, es necesario analizar los siguientes elementos:

- I) Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse.
- II) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- III) Obtención de un lucro o explotación comercial de la frecuencia

- IV) Afectación a un sistema de telecomunicaciones o radiodifusión previamente autorizado.

Antes de entrar al análisis de los citados elementos, resulta oportuno destacar que los servicios de radiodifusión son considerados servicios públicos de interés general, tanto por la CPEUM como por los criterios sostenidos por el Poder Judicial Federal.

En efecto, de acuerdo con el artículo 6o., apartado B, fracción III, de la CPEUM, la radiodifusión es un servicio público de interés general y corresponde al Estado garantizar que sea prestado en condiciones de competencia y calidad.

"Artículo 6o.

...
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

...
III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución."

(Énfasis añadido)

De igual forma lo definió la SCJN en la sentencia de la acción de Inconstitucionalidad 26/2006, donde consideró a la radiodifusión en general como una actividad de interés público, tal como se observa de la siguiente transcripción:

"Se desprende de los artículos transcritos, que los servicios de radio y televisión se consideran como una actividad de interés público..."

La importancia de los servicios públicos radica, entre otros motivos, en que una afectación a su prestación implica necesariamente un daño a la colectividad, por lo que el poder público, dirigido a su fin de bien común, busca ante todo garantizar la correcta prestación de tales servicios.

De lo anterior se desprende la importancia que reviste para el Estado, tanto el uso eficiente de un bien de dominio público de la Nación, como lo es el espectro radioeléctrico, como la prestación de un servicio público de interés general, como en la especie lo es el servicio público de radiodifusión; cumpliendo al efecto con las disposiciones establecidas tanto en la CPEUM como en la LFTyR.

Por lo anterior, el monto de la multa que se imponga debe guardar relación con la naturaleza de la infracción atendiendo al bien jurídico tutelado, que en el presente caso es el uso de un bien de dominio público de la Nación de manera eficiente y la prestación de un servicio público de radiodifusión.

Así, el hecho de que la CPEUM y la LFTyR exijan que se otorgue una concesión para prestar el servicio público de radiodifusión, obedece a que el mismo, al ser un recurso natural limitado, se encuentra sujeto al régimen de dominio público de la Federación, correspondiendo al Estado su rectoría.

En ese sentido, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para la expedición de la LFTyR en relación con la gravedad de las infracciones señaló lo siguiente:

"En el título correspondiente a sanciones, se clasifican las conductas infractoras en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas. En apartado por separado, se clasifican las conductas que ameritan la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

Asimismo, el Dictamen emitido por la Cámara revisora en relación con la citada iniciativa señaló lo siguiente:

"De acuerdo con el mandato constitucional, la ley deberá contemplar un sistema efectivo de sanciones, para ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron adoptar primordialmente un sistema de sanciones basado en porcentajes de ingresos, como ha sido apuntado. En la Minuta se reconoce que existen conductas que deben ser sancionadas de manera diferenciada a fin de que la sanción logre su efectividad, es decir, ser ejemplar y al mismo tiempo disuadir al infractor, por ello, se establecieron para algunos casos sanciones basadas en salarios mínimos y para otros sanciones con base en los ingresos que se obtuvieron adicionalmente, por causa de la comisión de la infracción e incluso, en algunos casos se prevé la posibilidad del apéncibimiento. Con respecto a los porcentajes de sanción, en la Iniciativa se establece un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

De lo anterior, se desprende que fue intención del Legislador establecer en la LFTyR un sistema de graduación de las conductas de la más leve a la más grave, por lo que en tal sentido resulta evidente que la multa que se pretenda imponer debe ser congruente con dicha estimación.

Hechas las anteriores precisiones, esta autoridad procede a analizar los componentes que determinan la gravedad de la conducta susceptible de ser sancionada.

1) Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse.

Si bien en el presente caso no se acredita un daño como tal al Estado, entendiéndose éste como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio del Estado como consecuencia del incumplimiento de una obligación, en el presente caso el Estado resiente un perjuicio, en virtud de que dejó de percibir ingresos por el

otorgamiento de una concesión que permitiera la prestación de servicios de radiodifusión de forma regular. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

En términos de lo establecido en el artículo 173 de la Ley Federal de Derechos, se deben cubrir al Estado por concepto de derechos una cuota por el otorgamiento de concesiones para establecer estaciones de radiodifusión sonora la cantidad de \$29,582.17 (veintinueve mil quinientos ochenta y dos pesos 17/100 M.N.).

En ese sentido resulta evidente que en el presente asunto sí se causa un perjuicio patrimonial al Estado, en virtud de que éste dejó de percibir el pago de los derechos correspondientes por el otorgamiento de la concesión respectiva para la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso o explotación de un bien del dominio público de la Federación, que en este caso lo es el espectro radioeléctrico.

Lo anterior, ya que corresponde de manera originaria al Estado el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico y éste puede permitir dicha actividad a los particulares a través de una concesión. Ahora bien para el otorgamiento de dicha concesión, el Estado lo hace a través del ejercicio de una función de derecho público y en consecuencia le corresponde a éste recibir el pago de derechos respectivo.

Bajo esta misma premisa, resultaría procede calcular lo que el Estado dejó de percibir por el pago de derechos anual por el uso del espectro para frecuencias de radiodifusión en términos de la ley de la materia, sin embargo en el presente asunto no existen elementos objetivos que permitan determinar con exactitud el tiempo que ha venido haciendo uso de la frecuencia el infractor y en consecuencia no se puede hacer el cálculo respectivo.

Adicionalmente, cabe destacar que dentro del presente análisis se podría considerar como daño la afectación que pudieran sufrir en su caso el mercado, los consumidores o bien la competencia en el sector de radiodifusión, sin embargo en el presente asunto no se identifica que se haya producido el mismo.

Lo anterior considerando que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población en donde se localizó el origen de la señal es una zona semi-urbana de aproximadamente 3,422 habitantes y no existen en dicha localidad estaciones de radiodifusión legalmente instaladas.

ii) El carácter intencional de la acción u omisión constitutiva de la infracción.

Del análisis de los autos que integran el presente expediente, se advierte que [REDACTED] era el propietario y responsable del inmueble visitado en el cual se prestaba el servicio de radiodifusión, además de ser evidente que conocía las instalaciones y equipos detectados en el inmueble visitado, así como el hecho de que al llevarse a cabo la visita, la persona que atendió la misma manifestó que sí tenía conocimiento que desde dicho inmueble se estaba transmitiendo una estación de radiodifusión, la cual operaba la frecuencia 100.7 MHz.

Con lo anterior y habiéndose acreditado la indebida prestación del servicio público de radiodifusión sin contar con el documento habilitante que lo autorice para ello, se puede presumir la intencionalidad en la comisión de la conducta, pues existen elementos suficientes que desvirtúan la presunción de inocencia a su favor que debe regir en todo procedimiento sancionador.

Por lo anterior, se considera que existen elementos suficientes para acreditar el carácter intencional de la conducta aquí sancionada.

iii) Obtención de un lucro o explotación comercial de la frecuencia

Del análisis de las constancias que obran en el expediente respectivo, no es desprende la existencia de una explotación comercial de la frecuencia que se detectó en operación, ya que no se cuenta con elementos de convicción que evidencien que [REDACTED] al prestar el servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 100.7 MHz, presta servicios de publicidad o que como parte de su programación se incluyan comerciales pagados, y en este sentido se estima que no existe lucro ni explotación comercial de su parte, respecto del uso de la frecuencia 100.7 MHz.

iv) Afectación a un sistema de telecomunicaciones o radiodifusión previamente autorizado.

En el presente caso y derivado de la práctica de la visita de Inspección-Verificación al propietario, y/o poseedor y/o responsable, y/o encargado del inmueble, instalaciones y equipos de radiodifusión que opera la frecuencia 100.7 MHz, en el domicilio conocido dentro de la localidad de Libertad, Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, con el objeto de "...constatar y verificar si los equipos y/o sistemas de radiodifusión y/o servicios de radiodifusión de LA VISITADA operan en la frecuencia 100.7 MHz y en su caso si cuenta con Instrumento legal vigente emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que justifique su uso legal..." no se desprendió que con motivo de la prestación del servicio de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 100.7 MHz, el presunto responsable afectara con ello sistemas de telecomunicaciones o de radiodifusión legalmente instalados, por lo que tal elemento no se considera actualizado en el presente caso.

Ahora bien, una vez analizados los elementos que integran el concepto de gravedad se considera que la conducta que se pretende sancionar es MEDIANAMENTE GRAVE de conformidad con lo siguiente:

- ✓ Existe la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso del espectro radioeléctrico sin contar con la concesión correspondiente.
- ✓ Quedó acreditado el carácter intencional de la conducta.
- ✓ No se acredita la obtención de un lucro o la explotación comercial de la frecuencia de radiodifusión.
- ✓ No se detectó la afectación a sistemas de telecomunicaciones o radiodifusión legalmente instalados.

En efecto, del análisis de los elementos antes referidos se desprende que la conducta del infractor reviste determinada gravedad en virtud de que el espectro radioeléctrico es un bien del dominio público de la Federación de naturaleza escasa, cuyo uso, aprovechamiento y explotación solo es posible a través del otorgamiento de una concesión. En tal sentido, el Estado Mexicano ha tenido a bien encomendar al Instituto regular el uso, aprovechamiento y explotación de dicho espectro con el objeto de que su utilización por parte de los particulares, como es el caso de [REDACTED], sea llevada a cabo bajo condiciones de igualdad y previo cumplimiento de los requisitos que al efecto establezca la ley, no siendo dable ni permisible que los particulares de manera arbitraria e ilegal hagan uso indiscriminado de dicho espectro en perjuicio de quienes observan la legislación en la materia; de ahí que ese uso indiscriminado y en contravención de la normativa estime como reprochable por la legislación aplicable y en consecuencia deba ser sancionado. No obstante al momento de determinar la gravedad de la conducta esta autoridad toma en cuenta que no se acreditó la obtención de un lucro o la explotación comercial de la frecuencia de radiodifusión por parte del presunto responsable; que no se produjo un daño a los mercados o a los consumidores, así como que tampoco se advirtió la afectación o generación de interferencias perjudiciales a sistemas de telecomunicaciones o de radiodifusión legalmente instalados.

II. Capacidad económica del infractor.

Como ya fue señalado en apartados precedentes de la presente resolución, [REDACTED] no presentó elementos que permitan establecer su capacidad económica.

Siendo importante destacar que para que esta Autoridad estuviera en posibilidad de tomar en cuenta de manera exacta e inequívoca la capacidad económica real del infractor, debía ser éste quien exhibiera dentro del procedimiento que se resuelve las pruebas necesarias para ello, pues el hecho de que esta Autoridad infiera su capacidad económica con base en presunciones, o determine el monto de la sanción a imponer sin poder establecer la capacidad económica de [REDACTED] deviene de la omisión del propio infractor de aportar los comprobantes fiscales que demostraran sus ingresos acumulables durante el ejercicio fiscal de dos mil catorce.

En tal virtud, no existen elementos objetivos que permitan a esta autoridad determinar la capacidad económica del infractor, sin embargo dicha circunstancia es atribuible a al infractor habida cuenta de que esta autoridad le dio la oportunidad de que se pronunciara al respecto así como para que proporcionara la documentación fiscal correspondiente.

Dicho criterio ha sido sostenido por el Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa especializado en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión al resolver los juicios de amparo 1637/2015-y-4/2016, promovidos en contra de resoluciones similares emitidas por este órgano colegiado.

III. Reincidencia

De los registros que obran en el Instituto se constata que [REDACTED] al momento de cometer la infracción que se sanciona en el presente procedimiento administrativo, no tiene antecedentes de haber incurrido en alguna violación a las disposiciones de la Ley, que hubiera sido sancionada por el propio Instituto, por lo que esta autoridad en el caso que nos ocupa no considera que se acredite el supuesto en análisis.

CUANTIFICACIÓN

Una vez analizados los elementos previstos en la ley de la materia para individualizar una multa, se procede a determinar el monto de la misma en atención a las siguientes consideraciones:

El monto de la multa que en su caso se imponga debe tener como finalidad inhibir la comisión de este tipo de infracciones, siendo ésta una de las razones que motivaron la Reforma Constitucional en la materia.

Al respecto, resulta importante tener en consideración lo señalado en la exposición de motivos de la Iniciativa que dio origen a dicha Reforma en la que expresamente se señaló lo siguiente:

"En consistencia con las atribuciones que se otorgan al Instituto Federal de Telecomunicaciones, se establecen las bases a las que deberá ajustarse el régimen de concesiones. Las adiciones propuestas tienen por objeto asegurar que en el otorgamiento de concesiones se atienda al fin de garantizar el derecho de acceso a la banda ancha y a los servicios públicos de radiodifusión y telecomunicaciones en condiciones de competencia, pluralidad, calidad y convergencia, y optimizando el uso del espectro radioeléctrico.

El régimen de concesiones debe estar basado en una política de competencia efectiva que permita alcanzar en el mediano plazo una cobertura universal así como las mejores condiciones posibles de calidad y precio en los productos y servicios. Se entiende así que la competencia en el sector constituye un instrumento central para asegurar el acceso a las

tecnologías de la información y además, en su caso, permite al Estado corregir las fallas de mercado.

En concreto, se propone lo siguiente:

La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes, en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

De lo señalado en la transcripción anterior se desprende la intención del Constituyente de prever que la LFTyR establezca un esquema efectivo de sanciones con el fin de que la regulación que se emita en la materia sea efectiva.

Al respecto cabe señalar que como antecedente de la Reforma aludida, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico ("OCDE") realizó un estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, el cual en la parte que interesa señaló lo siguiente:

"Se debe facultar a la autoridad reguladora para que imponga multas significativas que sean lo bastante elevadas (mucho más altas que las actuales) para que resulten disuasorias y garanticen la observancia de la regulación vigente, así como el cumplimiento de sus objetivos. También debe tener suficientes facultades para requerir información a las empresas a fin de cumplir con sus obligaciones, así como para sancionar a aquellas que no respondan a los requerimientos razonables.

Una limitación importante en el uso de concesiones para controlar el comportamiento es el tipo de sanción. En México, la LFT prevé que el incumplimiento de los términos de una concesión podría llevar a la revocación de la concesión y al cese de operaciones. Ésta no es una opción realista. De hecho, sería difícil encontrar un ejemplo de tales sanciones en toda la OCDE. Es preciso reformar la ley para permitir la imposición de formas intermedias de sanción financiera lo suficientemente elevadas para que sean disuasivas. Las reformas a la ley también podrían permitir la separación funcional y/o estructural de un incumbente con poder de mercado como sanción por el reiterado incumplimiento, como ha ocurrido en algunos países de la OCDE (p. ej., Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Australia, Nueva Zelanda). La LFT, en la actualidad, establece disposiciones para sancionar a quienes violen sus preceptos. Las

multas que pueden imponerse hoy día son muy bajas: fluctúan desde "2 000 a 20 000 salarios mínimos" diarios para violaciones menores, hasta "10 000 a 100 000 salarios mínimos" por transgresiones mayores, como el incumplimiento de obligaciones relativas a la interconexión. Con un salario mínimo diario de 59,82 pesos en la ciudad de México, la sanción máxima, que podría imponerse sería de unos 500 000 dólares. Es obvio que las sanciones deben ser proporcionales a la infracción."

Congruente con lo anterior, en la referida Reforma el Constituyente consideró necesario que la ley de la materia estableciera un esquema efectivo de sanciones, no sólo en cuanto a los procesos para su imposición, sino también en relación con los montos de las mismas, al considerar que las existentes no eran suficientes para disuadir las conductas infractoras y garantizar la observancia de la LFTyR.

En ese sentido, la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal para la expedición de la LFTyR, en relación con el esquema de sanciones señaló lo siguiente:

"El artículo 28 constitucional recién reformado en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, prevé que la ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del Título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.

Para cumplir este mandato constitucional, la iniciativa que se presenta a esta soberanía, propone un esquema de sanciones basados en porcentajes de ingresos de los infractores a fin de homologarlo con el esquema de sanciones establecido en la Ley Federal de Competencia Económica.

Los porcentajes de ingresos permiten imponer sanciones de manera equitativa, ya que la sanción que se llegue a imponer, incluso la máxima, será proporcional a los ingresos del infractor, lo que evita que llegue a ser ruinosa. En un esquema de sanciones basados en salarios mínimos, se corre el riesgo que al momento de imponer la sanción, ésta llegue a ser de tal magnitud que pueda exceder incluso, los ingresos del infractor.

Las sanciones por porcentajes de ingresos evitan la posibilidad de excesos en el cálculo del monto de la sanción y al mismo tiempo cumplen su

función de ser ejemplares a fin de inhibir la comisión de nuevas infracciones.

Para establecer este tipo de sanciones, es menester contar con la información de los ingresos del infractor, es por esto que se establecen la facultad de requerir al infractor de tal información con apercibimiento que de no proporcionarlo se optará por un esquema de salarios mínimos, el cual también se contempla.

El esquema de salarios mínimos solo aplicará en el caso que no se cuente con la información de los ingresos del infractor.

En el título correspondiente a sanciones, se clasifican las conductas infractoras en cinco rubros, las cuales van desde las leves a las graves, estableciendo correlativamente las sanciones que van de las más bajas a las más altas. En apartado por separado, se clasifican las conductas que ameritan la revocación de la concesión.
(Énfasis añadido)

Asimismo, el Dictamen emitido por la Cámara revisora en relación con la citada Iniciativa señaló lo siguiente:

"De acuerdo con el mandato constitucional, la ley deberá contemplar un sistema efectivo de sanciones, para ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideraron adoptar primordialmente un sistema de sanciones basado en porcentajes de ingresos, como ha sido apuntado. En la Minuta se reconoce que existen conductas que deben ser sancionadas de manera diferenciada a fin de que la sanción logre su efectividad, es decir, ser ejemplar y al mismo tiempo disuadir al infractor, por ello, se establecieron para algunos casos sanciones basadas en salarios mínimos y para otros sanciones con base en los ingresos que se obtuvieron adicionalmente, por causa de la comisión de la infracción e incluso, en algunos casos se prevé la posibilidad del apercibimiento. Con respecto a los porcentajes de sanción, en la iniciativa se establece un sistema gradual, catalogando aquellas conductas que se consideraron menos graves con sanciones muy leves y así sucesivamente hasta las conductas infractoras que se consideraron muy graves que incluso podrían ameritar la revocación de la concesión."

(Énfasis añadido)

De lo señalado en los procesos legislativos transcritos se advierten las premisas que tomó en consideración el legislador al emitir las disposiciones que regulan la imposición de sanciones en la materia, entre las que destacan las siguientes:

- Establecer un esquema efectivo de sanciones.
- Que las sanciones cumplan con la función de inhibir la comisión de infracciones.
- Que sean ejemplares.
- Que atiendan primordialmente al ingreso del infractor.
- La propia LFTyR contenga una graduación de las conductas.
- Que las multas sean mayores a las que establecía la legislación anterior la cual no cumplió con los fines pretendidos.
- El esquema de salarios mínimos se estableció para el caso de no contar con la información de los ingresos del infractor.

Así, al no contar con la información fiscal del infractor se debe aplicar el esquema basado en salarios mínimos, el cual permite a la autoridad sancionadora determinar el monto de la multa atendiendo a los elementos establecidos en la propia LFTyR.

En ese orden de ideas, resulta importante tener presente que por la comisión de la conducta aquí sancionada, la abrogada Ley Federal de Radio y Televisión establecía en su artículo 103, multa de cinco mil a cincuenta mil pesos, por lo que con la intención de cumplir con los fines de la Ley y la Reforma señalada, el monto que se debe considerar en el presente asunto por la simple comisión de la conducta atendiendo a la gravedad de la misma debe ser superior a lo previsto por la abrogada Ley.

Así es, como fue analizado en páginas precedentes, la conducta sancionada se hace consistir en la prestación de un servicio público de radiodifusión, a través del uso de un bien de dominio público de la Nación como lo es el espectro radioeléctrico, sin contar con concesión alguna, situación que pone de manifiesto la gravedad de la conducta. No obstante lo cual y de acuerdo a las circunstancias particulares del presente caso, se consideró a la misma como

MEDIANAMENTE GRAVE, en virtud de que no se acreditó la obtención de un lucro o la explotación comercial de las frecuencias de radiodifusión, ni se determinó la afectación a sistemas de telecomunicaciones o de radiodifusión legalmente autorizados.

Adicionalmente, para el cálculo de la multa respectiva resulta importante considerar que con dicha conducta se produjo un perjuicio al Estado, en virtud de que este dejó de percibir ingresos por el pago de derechos por el otorgamiento de una concesión y, en su caso, por el uso del espectro.

Ahora bien, a efecto de determinar el monto de la multa que resulta aplicable en el presente asunto, hay que tomar en cuenta que como ha quedado señalado en párrafos precedentes, al desconocer los ingresos del presunto infractor, conforme al artículo 299 de la LFTyR, esta autoridad podrá imponer una multa de hasta 82 millones de veces el salario mínimo.

En tal sentido, esta autoridad debe tomar en consideración el momento en que se concretó la conducta que se pretende sancionar para determinar el Salario Mínimo General Diario Vigente ("SMGDV"), que se utilizará para el cálculo y determinación de la misma.

Sentado lo anterior, de conformidad con el último párrafo del artículo 299 de la LFTyR, esta autoridad debe considerar el SMGDV en el Distrito Federal del día en que se realice la conducta o se actualice el supuesto, que en la especie es el año dos mil quince, correspondiendo para dicha anualidad un salario que ascendió a la cantidad de \$70.10 (Setenta pesos 10/100 M.N.), tomando como base el resolutivo segundo de la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2015", publicado en el DOF el veintinueve de diciembre de dos mil catorce.

Por lo anterior, esta autoridad tomando en cuenta los elementos analizados, en relación con la conducta realizada por la infractora, atendiendo a los motivos y fundamentos que han quedado expuestos a lo largo de la presente resolución y considerando que el monto de la multa debe ser suficiente para corregir su comisión y para inhibirla en lo futuro, procede a imponer a [REDACTED] una multa por mil días de SMGV que ascienden a la cantidad de \$70,100.00 (Setenta mil cien pesos 00/100 M.N.), por prestar servicios públicos de radiodifusión sin contar con la concesión correspondiente y con ello usar frecuencias del espectro radioeléctrico.

En relación con lo anterior, es de resaltar que esta autoridad goza de arbitrio para fijar el monto de la multa, atendiendo a lo establecido en los artículos 299, párrafo tercero, fracción IV, y 301 de la LFTyR.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes:

"MULTAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE SU MONTO. Basta que el precepto legal en que se establezca una multa señale un mínimo y un máximo de la sanción, para que dentro de esos parámetros el aplicador la gradúe atendiendo a la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, sin que sea necesario que en el texto mismo de la ley se aluda a tales lineamientos, pues precisamente al concederse ese margen de acción, el legislador está permitiendo el uso del arbitrio individualizador, que para no ser arbitrario debe regirse por factores que permitan graduar el monto de la multa, y que serán los que rodean tanto al infractor como al hecho sancionable.

(Época: Novena Época, Registro: 186216, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, Materia(s): Común, Tesis: VI.3o.A. J/20, Página: 1172)".

Ahora bien, en virtud de que [REDACTED] no cuenta con la concesión a que se refiere el artículo 66 de la LFTyR para prestar servicios públicos de radiodifusión,

se actualiza la primera de las hipótesis normativas previstas en el artículo 305 de la LFTyR.

En efecto, el artículo 305 de la LFTyR, expresamente señala:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

(Énfasis añadido)

En tal virtud, procede declarar la pérdida en beneficio de la Nación de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dicha infracción consistentes en : a) una grabadora marca Sony sin modelo ni número de serie; b) diversos cables y línea de transmisión; c) dos micrófonos sin marca ni modelo; y d) un monitor marca Samsung sin modelo ni número de serie; habiendo designando como interventor especial (depositario) de los mismos al C. Raúl Leonel Mulhía Arzalez, por lo que una vez que se notifique la presente resolución en el domicilio de [REDACTED] se deberá solicitar al interventor especial (depositario) ponga a disposición los equipos asegurados.

En virtud de que quedó plenamente acreditado que [REDACTED] incumplió con lo establecido en el artículo 66 en relación con el 75 de la LFTyR, y que en consecuencia se actualizó la hipótesis del artículo 305 del citado ordenamiento, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones:

RESUELVE

PRIMERO. [REDACTED] en su carácter de propietario del inmueble donde se detectaron las instalaciones de la estación de radiodifusión que opera la frecuencia 100.7 MHz, ubicada en domicilio conocido, Localidad de la Libertad,

Municipio de Huimanguillo, Estado de Tabasco, es responsable de la violación a lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, al haberse detectado que en el inmueble de su propiedad se encontraba prestando el servicio público de radiodifusión a través de la frecuencia **100.7 MHz** sin contar con concesión, permiso o autorización otorgado por la autoridad competente, tal como quedó debidamente demostrado en la presente Resolución.

SEGUNDO. De conformidad con lo señalado en las Consideraciones CUARTA, QUINTA y SEXTA de la presente Resolución se impone a [REDACTED] una multa por mil días de **SMGDV** que asciende a la cantidad de **70,100.00** (Setenta mil cien pesos 00/100 M.N.), por incumplir lo dispuesto en el artículo 66 en relación con el 75, ambos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que en el inmueble de su propiedad se estaban prestando servicios públicos de radiodifusión sin contar con la concesión correspondiente.

TERCERO. [REDACTED] deberá cubrir ante la Oficina del Servicio de Administración Tributaria que por razón de su domicilio fiscal le corresponda, la multa impuesta dentro del plazo de treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la presente Resolución, en términos del artículo 65 del Código Fiscal de la Federación.

CUARTO. Gírese oficio a la autoridad exactora, a fin de que si la multa no es cubierta dentro del término de ley, con fundamento en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, proceda a hacer efectivo el cobro de la misma.

QUINTO. De conformidad con lo señalado en las Consideraciones TERCERA, CUARTA y QUINTA de la presente Resolución, y toda vez quedo acreditada la prestación del servicio público de radiodifusión a través del uso de la frecuencia 100.7 MHz en la población de Huimanguillo, Tabasco, con fundamento en el

artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se declara la pérdida en beneficio de la Nación tanto de la estructura de aproximadamente 60 metros de altura, donde se ubican cuatro elementos radiadores (antenas) detectada durante el desarrollo de la visita de verificación ordinaria número IFT/DF/DGV/702/2015, como de los equipos empleados en la comisión de dicha infracción consistentes en:

Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Grabadora	Marca Sony	Sin modelo	Sin número de serie	0106
Cables diversos y línea de transmisión	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0107
Dos micrófonos	Sin marca	Sin modelo	Sin número de serie	0108
Monitor	Samsung	Sin modelo	Sin número de serie	0109

SEXTO. Se instruye a la Unidad de Cumplimiento, para que a través de la Dirección General de Verificación, comisione a personal adscrito a su cargo para hacer del conocimiento del Interventor especial (depositario) la revocación de su nombramiento y en consecuencia ponga a disposición los bienes que pasan a poder de la Nación, previa verificación de que los sellos de aseguramiento no han sido violados y previo inventario pormenorizado de los citados bienes.

SÉPTIMO. Con fundamento en el artículo 35, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena que la presente Resolución se notifique a [REDACTED] en el domicilio precisado en el proemio de la presente Resolución.

OCTAVO. En términos del artículo 3, fracción XIV de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se informa a [REDACTED] que podrá consultar el expediente en que se actúa en las oficinas de la Unidad de Cumplimiento de este Instituto Federal de Telecomunicaciones, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 838, cuarto piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03100, (Edificio Alterno de este Instituto), dentro del siguiente horario: de lunes a jueves de las 9:00 a las 18:30 horas y los viernes de las 9:00 a las 15:00 horas.

NOVENO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XV y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de [REDACTED] [REDACTED] que la presente Resolución constituye un acto administrativo definitivo y por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 312 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, procede interponer ante los juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, el juicio de amparo indirecto dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente resolución, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DECIMO. En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los artículos señalados en las Consideraciones Primera y Segunda de la presente Resolución.



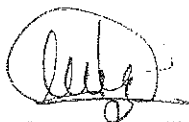
Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar
Comisionado Presidente



Ernesto Estrada González
Comisionado



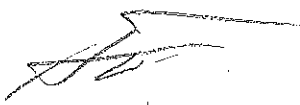
Adriana Sofia Labardini Inzunza
Comisionada



María Elena Estavillo Flores
Comisionada



Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado



Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XI Sesión Ordinaria celebrada el 27 de abril de 2016, por mayoría de votos de los Comisionados presentes Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar, Ernesto Estrada González, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Teja; y con el voto en contra de la Comisionada Adriana Sofia Labardini Inzunza; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/270416/209.